

—derecho comparado y un amplio recurso a la jurisprudencia—, permite una particular comprensión del ordenamiento jurídico propio, así como despertar un sano interés por el conocimiento de otros ordenamientos estatales. Quizás hubiera sido deseable un índice de autores citados o de bibliografía utilizada.

MARÍA DEL MAR MARTÍN GARCÍA

**Vittorio PARLATO**, *I diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico*, G. Giappichelli Editore, Torino 1998, 150 pp.

En el primer capítulo sobre la «naturaleza y funciones de los derechos en el ordenamiento canónico» (pp. 1-21), el autor examina las garantías de derecho sustancial y procesal que el ordenamiento canónico ofrece para un ejercicio efectivo de los derechos enunciados tanto en el Código de Derecho Canónico para la Iglesia latina como en el *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* de las Iglesias orientales (es de alabar el interés del Profesor Parlato en tener en cuenta al Código oriental, tan a menudo ignorado por los estudiosos de la Iglesia latina). En su opinión, los derechos fundamentales son tan sólo aquéllos que están ligados, conexos, a los deberes que caracterizan el *status* fundamental del fiel en la Iglesia. Por tanto, la naturaleza y alcance de tales derechos han de derivar de los tradicionales e inmutables principios base del ordenamiento de la Iglesia: deber de todo fiel de alcanzar la salvación eterna, derecho de recibir de los Pastores el íntegro anuncio de la fe, de la esperanza y de la caridad mediante los sacramentos y la Palabra, participación responsable en la edificación de la Iglesia, y el principio de dignidad de la persona.

Gozan los bautizados de otros derechos, derechos humanos, como son el derecho a la libertad religiosa, o a la vida. El autor subraya también el derecho a la libertad de elección en materia espiritual de los no católicos; y sus consecuencias en las relaciones entre católicos y ortodoxos (por ejemplo, en cuanto al problema del proselitismo).

En el capítulo siguiente, el autor pone en relación el «ejercicio de los derechos y la *salus aeterna animarum*» (pp. 23-42). Los derechos que tienen que ver con los *tria munera* se sitúan en fin de cuentas en el marco más amplio del *ius recipiendi ab Ecclesia quae necessaria sint ad salutem aeternam*, derecho que modera la autoridad eclesiástica con el fin de preservar la comunión eclesial, definida por el *vinculum cultus, fidei et disciplinae*. Este *moderamen* ha de respetar los derechos de los fieles conforme al can. 221 § 1 CIC y can. 24 § 1 CCEO. De allí que se establezca una relación entre los derechos subjetivos de los bautizados y su regulación por parte de la autoridad. Por ejemplo, los Sagrados Pastores están revestidos de la *potestas sanctificandi, docendi et regendi* y son también los sujetos pasivos del derecho subjetivo de los fieles a recibir los medios de salvación, del que tienen el poder de conferirlos para la tutela de los intereses de los mismos fieles. Los derechos y deberes de todos los fieles se abren con la afirmación del principio de igualdad (can. 208 CIC, can. 11 CCEO) que es igualdad en la dignidad y diversidad en el ejercicio de los *tria munera*, y también, aunque no aparezca formulado en la codificación, una igualdad que se fundamenta en el derecho natural.

Los siguientes capítulos pasan revista a los derechos conexos respectivamente con el *munus sanctificandi*, el *munus docendi*, y el *munus regendi*. El cap. III (pp. 43-59) estudia por tanto el derecho fundamentalísimo a recibir de la sagrada Jerarquía los medios de salvación y los derechos que expresan los *tria munera*, o sea la casi totalidad de los derechos comunes a todos los fieles recogidos en los dos Códigos. El autor centra su atención en el origen neotestamentario de los sacramentos y de su normativa básica, como evocación de los derechos conexos al *munus sanctificandi*, para desarrollar lo referente al derecho a la propia espiritualidad y al propio rito.

El cap. IV está dedicado a «los derechos conexos al *munus docendi*» (pp. 61-80), y presenta el objeto de la potestad de magisterio, así como su fundamentación escriturística. Los fieles tienen derecho a conocer la doctrina de la fe, derecho que se subdivide en derecho a la educación cristiana a través de la formación catequética (can. 217 CIC, can. 14 CCEO), derecho a la investigación científica en ciencias sagradas (can. 218 CIC, can. 21 CCEO), derecho a manifestar sus necesidades, en especial las espirituales, a la autoridad eclesiástica (can. 212 § 2 CIC, can. 15 § 2 CCEO), derecho al desacuerdo y a la libertad de elección en materias temporales (can. 747 CIC, can. 595 CCEO).

El cap. sobre «los derechos relativos al *munus regendi*» es el más largo, y se divide en tres títulos (pp. 81-120). El primero de ellos considera «la acción de los fieles en la Iglesia», no sin sentar en primer lugar los fundamentos bíblicos del *munus regendi*. Los derechos ligados al *munus docendi* dependen de modo par-

ticular del ejercicio de los carismas personales en la Iglesia. Se trata de la promoción y sostenimiento de la acción de la Iglesia (can. 216 y 211 CIC, can. 19 y 14 CCEO), de expresar su parecer en lo que se refiere al bien de la Iglesia y de darlo a conocer a los demás fieles, derecho que supone la debida ciencia y competencia (can. 212 § 3 CIC y can. 21 § 3 CCEO), derecho a ciertas garantías en la aplicación de las penas canónicas (can. 221 § 3 CIC y can. 24 § 3 CCEO). El título segundo está enteramente dedicado al derecho de asociación, tal como estaba configurado en el Código Piobenedictino, y modificado en los documentos del Concilio Vaticano II y en el esquema de la *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, para llegar a plasmarse en la normativa del CIC y del CCEO. Al derecho de asociación va unido el derecho de reunión, que se presenta como «una libertad instrumental para el ejercicio de una actividad conexas al fin social» (p. 110). La tutela penal es objeto del tercer título, y estudia las garantías reconocidas a los fieles en la aplicación de las penas, con sus respectivos límites. El autor pone de relieve cómo la normativa combinada de los can. 1476 y 1480 del CCEO, que prevé un principio de oralidad en el procedimiento que lleva al pronunciamiento inmediato de la sentencia, ofrece una mayor garantía para los fieles y podría suponer una evolución en un sentido más legal del derecho penal canónico en general. Un último punto tiene que ver con el tema de la *iurisdictio in nolentes*: aquellos bautizados que se han alejado de la Iglesia se excluyen, por el mismo hecho, del ejercicio de sus derechos, aunque sigan siendo miembros de la Iglesia. Esto se explica por el hecho de que el ejercicio de los derechos en la Iglesia supone la plena

comunidad y la búsqueda activa de la salvación.

El cap. VI y último afronta el tema de «los derechos fundamentados en la dignidad de la persona humana» (pp. 121-142). Se trata de derechos que se fundamentan en el derecho divino natural. Su actuación no está sujeta al mismo tipo de *moderamen* por parte de la autoridad eclesiástica que el de los derechos ligados a los *tria munera*, sino a los límites que señalan los can. 223 CIC y 26 § 1 CCEO. La intervención reguladora de la autoridad eclesiástica está motivada por la necesidad de proteger la *salus aeterna animarum* y el bien común social. Esta categoría de derechos fundamentales comprende el derecho a la libre elección del propio compromiso eclesial o estado de vida (can. 219 CIC y can. 22 CCEO), que no puede sufrir ningún tipo de coacción; y el derecho a la protección legal, que no figuraba explícitamente en el Código de 1917 y que ha sido puesto de relieve por el Concilio Vaticano II. Este derecho a la protección legal (can. 221 CIC y can. 24 CCEO) se concreta esencialmente en poder acudir a la vía judicial y, en los casos previstos por la ley, a la vía administrativa, para proteger y tutelar los propios derechos, y en el derecho a ser juzgado sólo conforme a las prescripciones legales. El Profesor Parlato señala también los distintos límites a la tutela legal. A esta categoría pertenece finalmente el derecho a la buena fama (can. 220 CIC y can. 23 CCEO).

DOMINIQUE LE TOURNEAU

**Eduardus N. PETER (ed.)**, *Tabulae congruentiae inter Codicem Iuris Canonici et versiones anteriores canonum*, con una introducción multilingual (English,

Français, Italiano, Español, Deutsch), Wilson & Lafleur, Quebec 2000, LIX+198 pp.

El objeto de estas *Tabulae* es facilitar la labor de investigación del canonista que se encuentra frente a las distintas redacciones de los cánones del Código de la Iglesia latina a lo largo del iter de *recognitio* del Código anterior. El trabajo, que comprende nos menos de 25.000 datos informativos, se presenta en seis columnas. La primera relaciona los cánones uno por uno, con una línea distinta para cada párrafo o subdivisión del canon. En la segunda columna encontramos la numeración correspondiente en el *Schema* de 1982. La columna siguiente se refiere a la *Relatio complectens* de 1981. En la cuarta columna, seguimos remontándonos en el tiempo, y tenemos los datos correspondientes al *Schema* de 1980. A continuación viene la *Disceptatio in coetu* de los distintos cánones, tal como figura en la Revista *Communications*. El autor señala que en determinados casos no le ha sido posible localizar una discusión del *coetus* acerca de una norma concreta (lo que materializa con una casilla gris sombreada). Finalmente la última columna da la *prima versio canonis*, o sea la referencia original de las disposiciones sometidas a los trabajos de los distintos *coetus* constituidos para ello.

A pesar de la metodología rigurosa seguida, las correlaciones adolecen de algunas deficiencias, como señala el mismo autor, ya que, por ejemplo, se pueden encontrar en *Communications* algunas disposiciones anteriores a la primera publicación oficial como *prima versio canonis*. Además, ocurre a veces que las primeras versiones llegaron a sufrir